

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, treinta (30) de abril de dos mil veintiuno (2021)

DEMANDANTE	: LUIS RUPERTO FRANCO SANTAMARÍA
DEMANDADO	: PROTECCIÓN S.A
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO (AUTO)
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-007-2011-01627-02
RADICADO INTERNO	: 060-21
DECISIÓN	: CONFIRMA AGENCIAS
ACTA NÚMERO	: 101

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a resolver el recurso dentro del proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

ANTECEDENTES

Mediante auto del tres (3) de febrero de dos mil veinte (2020) el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín, reajustó el valor de las costas impuestas en la sentencia de primera instancia, pasando de \$6.000.000 a la suma de 10 salarios mínimos legales para el año 2020, correspondientes a la suma de \$8.778.030, fecha en la cual la Corte Suprema de Justicia adopta la decisión, de conformidad con el Acuerdo 1887 de 2003 y porque las obligaciones impuestas en la sentencia de primera instancia, a la fecha, se incrementaron sustancialmente.

Frente a lo anterior, el apoderado de la sociedad PROTECCIÓN S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, porque la liquidación no resulta acorde con lo dispuesto en el Acuerdo 1887 de 2003 modificado por el párrafo del literal 2.1.1 del Acuerdo 2222 de 2003, la cual es aplicable al presente caso. Que pese a estar la condena dentro del límite legal, considera que la misma resulta excesiva si se tiene en cuenta los demás criterios para la determinación de la cuantía que señala el art. 3º del citado Acuerdo, lo que

hace que al momento de fijarse la agencias en derecho, era necesario valorar el actuar de los apoderados judiciales, los cuales fueron correctos, se actuó con lealtad procesal, el proceso se resolvió en ambas instancias en un tiempo prudente y nunca se entorpeció el curso normal del mismo. Sostiene que la condena en costas no puede convertirse en una punición desproporcionada respecto de una parte, que antes y durante el proceso, ha actuado de buena fe y bajo los parámetros legales.

Con base en lo anterior, solicitó modificar la anterior decisión y se disminuyera el valor de las agencias en derecho, y adecuarlas a los criterios del Acuerdo 2222 de 2003.

Al respecto el Juez de primera instancia, en auto del quince (15) de febrero de dos mil veintiuno (2021), al momento de resolver el recurso de reposición decide NO REPONER LA DECISIÓN, resaltando que el apoderado cita la norma aplicada por el despacho en la liquidación, correspondiente al literal 2.1.1 del Acuerdo 1887 de 2003, y alude que el despacho fijó 10 salarios mínimos legales, como costas, siendo el límite 20 salarios mínimos legales, e insiste que hay un exceso en la cuantía y no se tiene en cuenta los demás criterios para determinarlo. Adicionalmente justifica su decisión, en que para el despacho era necesario reajustar el valor de las costas impuestas en la sentencia de primera instancia, con fecha del 2 de mayo de 2013 porque la duración del trámite fue de 10 años, los recursos interpuestos por la Codemandada y las obligaciones impuestas a la fecha de la providencia recurrida, se habían incrementado por el paso del tiempo, y que no existe exceso en la cuantía, porque la norma fijó como límite, 20 salarios mínimos legales y el despacho fijó la mitad. En virtud de dicha decisión concedió el recurso de apelación.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El apoderado de la parte accionada considera que se debe revocar el auto de primea instancia, acorde a lo dispuesto en el párrafo del literal 2.1.1 del Acuerdo 1887 de 2003 modificado por el Acuerdo 2222 de 2003, reiterando lo dicho en el recurso interpuesto.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Se centra el problema jurídico en determinar si las agencias impuestas por la A Quo, a la accionada Protección SA son excesivas o desajustadas frente a la

naturaleza del proceso, las pretensiones conseguidas, la duración y la calidad de accionante y si están o no acordes a lo regulado en el Acuerdo 1887 de 2003.

Para realizar completo, se debe recordar que las pretensiones de la demanda versaron en el reconocimiento de la pensión de invalidez desde la fecha de estructuración que lo fue el 1º de enero de 2009, al pago de los intereses moratorios, la indexación de la condena y las costas procesales.

En primera instancia, proferida el veintidós (22) de marzo de dos mil trece (2013), el Juzgado Cuarto de Descongestión Laboral del Circuito de Medellín, DECLARÓ que el actor tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a cargo de Protección S.A., a partir del 1º de enero de 2009, y como consecuencia de lo anterior, CONDENÓ a la sociedad Protección S.A. al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez desde el 1º de enero de 2009 y a los intereses moratorios desde el 18 de octubre de 2010 y hasta el pago efectivo de la condena. ABSOLVIÓ a la demandada de las demás pretensiones invocadas en su contra. ORDENÓ a Colpensiones a realizar el pago del bono pensional a favor de la sociedad Protección S.A. por el tiempo en que el actor cotizó en el régimen de prima media, y le ordenó al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO para que proceda a levantar la restricción de la emisión del bono pensional por el actor. E impuso las costas a cargo de Protección S.A. en la suma de \$6.000.000.

En segunda instancia, el Tribunal en Superior de Medellín, CONFIRMÓ en todas sus partes la providencia de primera instancia y condenó en costas en esa instancia a cargo de la sociedad PROTECCIÓN S.A. en la suma de \$689.455.

Luego ante el recurso de casación interpuesto, la Corte Suprema de Justicia en Providencia del tres (3) de noviembre de dos mil veinte (2020), dispuso NO CASAR la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Medellín.

Y mediante auto del tres (3) de febrero de dos mil veintiuno (2021), el juzgado de conocimiento liquidó las costas en la suma de \$9.467.485, teniendo en cuenta que las agencias en derecho de primera instancia ascienden a la suma de \$8.778.030 y las agencias en derecho de segunda instancia asciende a \$689.455 (fls 317 y 318).

Al respecto la Sala considera aplicable al caso, el numeral 4º del artículo 366 del CGP, que dispone:

“3. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o éste y un máximo, el juez tendrá además en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas ...”.

El Acuerdo 1887 de 2003 reza:

“ 2.1.1. PAR. —Si la sentencia reconoce prestaciones periódicas, hasta veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes.”

Es decir que la A Quo, en aplicación de la norma transcrita, decide ajustar las costas a 10 salarios mínimos legales, los cuales ostensiblemente inferiores al tope máximo establecido que lo es de 20 salario mínimos legales.

Adicionalmente, atendiendo a la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado de la parte demandante, la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, considera la Sala que se trata de una demanda presentada el 14 de diciembre de 2011, que en el presente proceso contra la sentencia de primera instancia que favoreció a la parte accionante, se interpuso recurso de apelación y ante la confirmación de la decisión, se presentó recurso de casación, lo que generó que su duración sea aproximadamente de 10 años, lo que hace que no se tornen excesivas las mismas.

En virtud de lo anterior, se CONFIRMARÁ la decisión de primera instancia.

Sin costas en esta instancia.

EL FALLO DEL TRIBUNAL

En mérito de lo expuesto y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, EN SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia impugnada de fecha y origen conocidos, proferida por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: Déjese copia de lo resuelto en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, devuélvase el expediente al Juzgado de procedencia.

TERCERO: Sin costas en esta instancia.

CUARTO: La presente decisión se notificará por ESTADOS.

Los Magistrados,



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
– SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N ° 074 del 03 de mayo de 2021

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/100>